

TIENE POR PRESENTADO RECURSO DE REPOSICIÓN Y
RESUELVE LO QUE INDICA

RES. EX. N° 10 / ROL A-007-2023

Santiago, 13 de agosto de 2025

VISTOS:

Conforme con lo dispuesto en el artículo segundo de la Ley N° 20.417, que establece la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente (en adelante, "LOSMA"); en la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en el Decreto con Fuerza de Ley N° 3, de 13 de mayo de 2010, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que Fija la Planta de la Superintendencia del Medio Ambiente; en el Decreto Supremo N° 30, de 20 de agosto de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, que Aprueba Reglamento sobre Programas de Cumplimiento, Autodenuncia y Planes de Reparación (en adelante, "D.S. N° 30/2012"); en la Resolución Exenta N° 1.338, de 07 de julio de 2025, de la Superintendencia del Medio Ambiente, que fija la Organización Interna de la Superintendencia del Medio Ambiente; en la Resolución Exenta RA 119123/152/2023, de 30 de octubre de 2023, de la Superintendencia del Medio Ambiente, que Nombra Jefatura de División de Sanción y Cumplimiento; y, en la Resolución N° 36, de 19 de diciembre de 2024, de la Contraloría General de la República, que Fija Normas Sobre Exención del Trámite de Toma de Razón.

CONSIDERANDO:

I. ANTECEDENTES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO

1° Mediante la Resolución Exenta N°1/Rol A-007-2023, de fecha 3 de abril de 2023, de acuerdo con lo señalado en el artículo 49 de la LOSMA, y luego de haberse acogido la autodenuncia presentada por Australis Mar S.A. (en adelante e indistintamente, "la empresa" o "el titular"), se dio inicio a la instrucción del procedimiento administrativo sancionatorio Rol A-007-2023, con la formulación de cargos a dicha empresa, en relación a las unidades fiscalizables CES BAHÍA BUCKLE (RNA 120183), CES PUERTO BROWNE (RNA 120190) y CES PUNTA LAUCA (RNA 120162), todas localizadas en la Región de Magallanes y Antártica Chilena y pertenecientes a la agrupación de concesiones N°53. La formulación de cargos fue notificada a la empresa a través de correo electrónico con fecha 3 de abril de 2023.

2° Con fecha 14 de agosto de 2024, estando dentro del plazo ampliado y nuevo plazo otorgado por la **Res. Ex. N°7/Rol A-007-2023**, la empresa presentó un nuevo PDC refundido, junto a los anexos que indica en su presentación.

3° Con fecha 29 de noviembre de 2024 se dictó la **Res. Ex. N° 8/Rol A-007-2023** que resolvió desagregar el procedimiento sancionatorio respecto de cada una de las unidades fiscalizables incluidas en este. De este modo, se crearon los expedientes sancionatorios Rol P-005-2024 respecto al CES Puerto Browne (RNA 120190), y Rol P-006-2024



respecto al CES Punta Lauca (RNA 120162), manteniendo el Rol A-007-2023 respecto al CES Bahía Buckle (RNA 120183).

4° Mediante la **Res. Ex. N°9/Rol A-007-2023**, de 18 de diciembre de 2024, esta Superintendencia resolvió rechazar el PDC presentado por el titular respecto al CES Bahía Buckle (RNA 120183) por no haber dado cumplimiento a los criterios de aprobación de este instrumento, conforme a lo indicado en la parte considerativa de dicha resolución. Esta resolución fue notificada a la empresa con fecha 18 de diciembre de 2024 a través de correo electrónico.

5° Con fecha 26 de diciembre de 2024, el titular interpuso recurso de reposición en contra de la resolución que rechazó el PDC, en virtud de los argumentos que indica.

6° Luego, con fecha 3 de febrero de 2025, la empresa ingresó a esta Superintendencia una carta conductora mediante la cual, con el objeto de respaldar lo señalado en su recurso de reposición, acompañó un informe en derecho titulado *“Eficacia como requisito de aprobación de los programas de cumplimiento en el contexto de una autodenuncia y la confianza legítima”*, de enero de 2025, elaborado por el profesor Iván Hunter Ampuero.

7° Finalmente, con fecha 26 de febrero de 2025, Diego Rojas Díaz, en representación de Fundación Terram, realizó una presentación solicitando que se tenga como interesada en el presente procedimiento sancionatorio, se tenga presente su personería y solicita notificación por los medios que indica.

II. PRESENTACIÓN DE FUNDACIÓN TERRAM DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2025

8° En su presentación de 26 de febrero de 2025, Diego Rojas Díaz, en representación de Fundación Terram (en adelante, “la Fundación”), solicitó ser considerado parte interesada en el presente procedimiento sancionatorio, en virtud de lo establecido en el artículo 21 de la Ley N° 19.880, particularmente en sus numerales segundo y tercero, que establecen que serán considerados interesados en el procedimiento administrativo *“2. Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que pueden resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte; 3. Aquellos cuyos intereses, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se apersonen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva”*.

9° Con base en dicha norma, la fundación argumenta en torno a una interpretación amplia del concepto de interesado. Esta interpretación encontraría su respaldo en el principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, suscrita por Chile, y el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe o Acuerdo de Escazú, suscrito y ratificado por Chile.

10° Señala que este último instrumento establece el deber de los estados de asegurar el derecho a participación del público en decisiones ambientales y que este incluye la oportunidad de presentar observaciones, las que deberán ser tomadas en cuenta por la autoridad pública.



11° Fundación Terram sostiene que la protección del medio ambiente constituye una función inherente a sus fines institucionales. En ejercicio de dicha labor, ha intervenido en diversos procedimientos sancionatorios tramitados por esta Superintendencia, en los cuales se le ha reconocido la calidad de interesado por haber actuado como denunciante. Adicionalmente, señala otros procedimientos en los se le ha otorgado dicha calidad sin haber presentado una denuncia previa al inicio del procedimiento, en virtud del interés colectivo que representa.

12° En respaldo adicional de su solicitud, la Fundación cita jurisprudencia de la Corte Suprema relativa al artículo 21 de la Ley N° 19.880, que reconoce la posibilidad de representación de intereses supraindividuales por parte de personas jurídicas debidamente constituidas. A juicio de la Fundación, esta interpretación resulta plenamente aplicable al caso en análisis, en tanto Fundación Terram es una organización no gubernamental, persona jurídica sin fines de lucro, y considerando que la actividad productiva objeto del procedimiento se relaciona con bienes nacionales de uso público y que, por tanto, afecta intereses colectivos.

13° A partir de los argumentos presentados y los documentos acompañados, se observa que efectivamente los estatutos de la Fundación Terram dan cuenta de una organización con personalidad jurídica legalmente constituida y con un interés legítimo relacionado con los hechos que motivan el presente procedimiento sancionatorio. Por consiguiente, se le otorgará la calidad de interesado en los términos del artículo 21 N°3 de la Ley N° 19.880.

14° Seguidamente, acompaña en el **primer otrosí** de su presentación una copia del Mandato judicial y administrativo, otorgado ante Notario Interino de Santiago Pablo Hernán José Retamal Grimberg de la Duodécima Notaría de Santiago, con fecha 23 de enero de 2025, bajo el Repertorio N° 1876 – 2025, donde consta la personería de Diego Rojas Díaz, calidad que se tendrá presente en este sancionatorio. Asimismo, la presentación viene acompañada de la escritura de constitución y estatutos de la Fundación Terram, Decreto de reforma de estatutos, Decreto de personalidad jurídica y copia de escritura pública de sesión de directorio de Fundación Terram celebrada con fecha 14 de marzo de 2018.

15° Por último, en su **segundo otrosí**, solicita que, los actos que se dicten en lo sucesivo sean remitidos a las casillas de correo electrónico que indica en su presentación. Dicha solicitud, será acogida por la SMA acorde a lo que se indicará en el resuelvo respectivo.

III. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR AUSTRALIS MAR S.A.

A. En relación con el plazo para su interposición.



16° De conformidad a lo establecido en el artículo 62 de la LOSMA “[e]n todo lo no previsto en la presente ley, se aplicará supletoriamente la ley N° 19.880”. Por su parte, el artículo 59 de la ley N° 19.880, dispone que “[e]l recurso de reposición se interpondrá dentro del plazo de cinco días ante el mismo órgano que dictó el acto que se impugna”.

17° La resolución recurrida fue notificada mediante correo electrónico, entendiéndose de conocimiento del notificado desde el momento en que dicho correo electrónico es recibido en la correspondiente bandeja electrónica.

18° Conforme a lo anterior, el recurso de reposición presentado con fecha 26 de diciembre de 2024 se entenderá interpuesto dentro de plazo.

B. En relación con la materia resuelta por la resolución recurrida.

19° En primer término, corresponde señalar que la LOSMA no contempla la procedencia general del recurso de reposición en el procedimiento sancionatorio, salvo en su artículo 55, respecto de la resolución sancionatoria. Con todo, el artículo 62 de la LOSMA señala que, en todo lo no previsto por ella se aplicará supletoriamente la Ley N° 19.880.

20° A su turno, el artículo 15 de la Ley N° 19.880 establece que “[T]odo acto administrativo es impugnable por el interesado mediante los recursos administrativos de reposición y jerárquico, regulados en esta ley (...).” Sin embargo, el inciso segundo de la referida disposición señala que los actos de mero trámite solo serán impugnables cuando determinen la imposibilidad de continuar un procedimiento o produzcan indefensión.

21° En este sentido, en cuanto a la naturaleza del acto impugnado, cabe señalar que la resolución recurrida –que resuelve el rechazo de un programa de cumplimiento– corresponde a lo que la jurisprudencia ha denominado un “**acto trámite cualificado**”, procediendo, de esta forma, el recurso de reposición en su contra.

22° En efecto, la sentencia Rol R-136-2016 emanada del Ilustre Segundo Tribunal Ambiental, sostiene que “[...] la resolución que se pronuncia sobre un programa de cumplimiento, constituye un acto trámite cualificado, en cuanto decide sobre el fondo del asunto planteado, lo que se transforma en un acto recurrible –mediante recurso de reposición- y, en consecuencia, objeto de control judicial”, por lo que es posible sostener que la resolución recurrida es de aquellos trámites impugnables de acuerdo a lo establecido en el artículo 15 inciso segundo de la ley N° 19.880.

23° De manera concordante con lo indicado precedentemente, el Resuelvo III de la Res. Ex. N° 9 / Rol A-007-2023 indica que dicha resolución puede impugnarse tanto por reclamo de ilegalidad ante el Tribunal Ambiental, como por medio de “*los recursos establecidos en el Capítulo IV de la ley 19.880 que resulten procedentes*”.

C. Sobre el traslado a interesados



24° El artículo 55 de la ley N° 19.880, señala “se notificará a los interesados que hubieren participado en el procedimiento, la interposición de los recursos, para que en el plazo de cinco días aleguen cuanto consideren procedente en defensa de sus intereses”.

25° En virtud del citado artículo, se procederá a dar traslado a los interesados del presente procedimiento, respecto del recurso de reposición interpuesto por Australis Mar S.A. contra la Res. Ex. N°9/Rol A-007-2023, a fin de que puedan presentar las alegaciones que estimen pertinentes.

RESUELVO:

I. TENER POR PRESENTADO el recurso de reposición interpuesto por José Luis Fuenzalida Rodríguez, en representación de AUSTRALIS MAR S.A., respecto de la Resolución Exenta N° 9 / Rol A-007-2023, encontrándose pendiente el análisis de fondo de dicho recurso.

II. TENER POR INCORPORADO AL EXPEDIENTE SANCIONATORIO el informe adjunto a la presentación de la empresa de fecha 3 de febrero de 2025, así como el escrito de fecha 26 de febrero de 2025 de la Fundación Terram y sus anexos respectivos.

III. OTORGAR LA CALIDAD DE INTERESADA EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO a Fundación Terram, de conformidad al artículo 21 de la Ley N° 19.880, de acuerdo con los fundamentos expuestos en los considerandos 18 a 24 de la presente resolución.

IV. TENER PRESENTE la personería invocada por Diego Rojas Díaz para representar a Fundación Terram en el presente procedimiento sancionatorio.

V. TENER PRESENTE la forma de notificación a través de correos electrónicos que indica, solicitada por Fundación Terram en su denuncia y presentación del 26 de febrero de 2025.

VI. DAR TRASLADO A LOS INTERESADOS, para que, en un plazo de cinco (5) días hábiles desde la notificación del presente acto, presenten las alegaciones que consideren pertinentes respecto del recurso de reposición interpuesto por Australis Mar S.A. contra la Res. Ex. N°9/Rol A-007-2023.

VII. NOTIFICAR POR CORREO ELECTRÓNICO, conforme lo resuelto mediante Res. Ex. N° 2145/2022 en relación a lo solicitado en su presentación de 22 de noviembre de 2022, a José Luis Fuenzalida Rodríguez en representación de Australis Mar S.A., en las casillas de correo electrónico designadas: [REDACTED]

Asimismo, notificar por correo electrónico, conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de la ley N° 19.880, y a lo solicitado por ella en su presentación de 26 de febrero de 2025, a Fundación Terram.





Felipe Ortúzar Yáñez
Fiscal Instructor División de Sanción y Cumplimiento
Superintendencia del Medio Ambiente

FPT

Correo electrónico:

- José Luis Fuenzalida Rodríguez, en representación de Australis Mar S.A., Salmones Islas del Sur Ltda. y Acuícola Cordillera Ltda., [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]

C.C:

- Jefe de la Oficina SMA, Región de Magallanes y Antártica Chilena

A-007-2023

